

La última generación de agricultores

Héctor Mauricio Gallego Arias*



No es tan cierto que haya sido olvidado y descuidado el campo en la historia reciente de Colombia. Pero sí lo han sido los campesinos. Tras la Constitución de 1991 se esperaba que todos los sectores sociales representados en esa histórica Asamblea Nacional estuvieran satisfechos de ver plasmada en ella las válidas aspiraciones de quienes habían padecido el desconocimiento secular y la exclusión.

Reconocida —al menos en el papel—, la soberanía de los indígenas sobre sus resguardos y de las comunidades negras sobre sus propiedades colectivas, los campesinos creyeron haber logrado también su propia conquista al consagrarse que la “producción de alimentos tendría una especial protección del Estado”. Pero la ilusión se desvaneció casi de inmediato con la revolución aperturista de los años noventa, y el campesinado sintió de nuevo traicionado su anhelo de ver concretados los derechos adquiridos y su nueva conquista.

Y no es tan cierto que el campo haya sido olvidado, porque antes de la década de los noventa se habían consolidado en el país grandes sectores de la producción agrícola y agroindustrial con inmensos beneficios derivados de la política pública de sustitución de importaciones, que les permitió generar muchísima riqueza a partir de cultivos con un mercado interno asegurado, libre como estaba de la competencia internacional.

La prosperidad entrañada en esa política no llegó a los campesinos: se quedó entre los terratenientes, los empresarios y los industriales del sector. Los agricultores de la economía campesina fueron arrojados de sus mejores tierras, por diversos factores, entre los que prima la violencia; fueron empujados a la colonización para mejorar tierras de las que serían luego desalojados y obligados a producir en terrenos marginales o casi estériles. Aún así aprendieron a adoptar tecnologías tanto apropiadas como inapropiadas y crearon nichos de mercado locales que les

permitieron sobrevivir y preservarse como cultura autóctona.

Transcurrido el decenio de los noventa empeoró la situación y a las crecientes oleadas de desplazamiento violento empezaron a sumársele otros éxodos por razones tan dispares como el deterioro del negocio agropecuario, la falta de oportunidades productivas, la pérdida de identidad cultural y la fascinación ejercida por los espejismos de la metrópoli; éstas últimas migraciones con menor despliegue estadístico que las forzadas por la intimidación armada, pero de incidencia semejante en la cotidianidad del país.

En estas circunstancias, el campo se fue quedando sin sus naturales moradores, los campesinos, reemplazados por asalariados de las grandes plantaciones y por nuevos propietarios reacios a darle uso agrícola a sus tierras, lo que sumado a la masiva migración juvenil en busca de mejores horizontes, ha ido transformando la economía campesina en una práctica reservada sólo a los viejos.

Muchas de las iniciativas productivas perviven gracias a la mano de obra barata o gratuita de las mujeres y los niños. Es recurrente la queja del sector cafetero de no contar con quien recolecte el grano, pese a los altos índices de desempleo registrados en las ciudades. Los grandes hacendados han desaparecido en su mayoría y quienes sobreviven han abrazado la modalidad de “ecológicos o especiales”, que les permite maniobrar en la contratación de personal y recabar mejores márgenes de ingresos.

Trabajar el campo no resulta ya atractivo para nadie y el esfuerzo de los campesinos por educar a sus hijos culmina en la decepcionante migración de los jóvenes. De esta manera, la añeja visión de ciertos planificadores de tener el campo tecnificado, caracterizado por una agricultura sin campesinos, es cada vez más patente en muchas regiones. La vieja política de desestimular la producción campesina como estrategia para favorecer la eficiencia de la gran producción tecnificada y, de paso, estimular la



industrialización de las ciudades, parece arrojar resultados.

En este marco, la economía campesina afronta el dilema de desaparecer o transformarse. De no hacerlo, su desaparición es sólo cuestión de tiempo. Mas si la opción viable es transformarse, el interrogante subsecuente es ¿transformarse en qué?, ¿hacia dónde?, ¿cuál es la oferta?. En apariencia, existe una completa plataforma gubernamental de estímulos para la reconversión a otros productos con mejores oportunidades en el mercado; pero en la práctica sólo aplica para productos de vocación exportadora y es sólo asequible para quienes gozan de una elevada capacidad de inversión. Entre los campesinos suele decirse que *la plata busca la plata*; sabia sentencia que refleja la inequidad del ofrecimiento estatal: el incentivo es para quien tiene capacidad financiera y tierras en abundancia.

La valerosa resistencia que presentan las comunidades campesinas a desaparecer como cultura se ve menguada a menudo por sesgadas iniciativas legislativas locales y por la normatividad internacional que presiona a las naciones débiles a incorporar cambios que favorezcan a las empresas internacionales que detentan el control sobre el mercado alimentario, sobre los insumos y las semillas.

Esta sombría contextualización histórica justifica la instauración de un modelo alternativo de producción que privilegie la economía campesina, planteado desde la Agricultura Ecológica con el compromiso de muchas or-

ganizaciones campesinas que se obstinan en defender el derecho a producir alimentos y se resisten a ver, en la actual, a la última generación de agricultores. De hecho, la política pública no disfraza su intencionalidad cuando afirma que el campo no requiere agricultores sino granjeros empresarios. Pero instaurar una cultura del empresarismo por decreto, a instancias de cualquier construcción colectiva no es más que otra prueba de la conspiración maquinada contra el campesinado, anunciada ya desde la década de los sesenta.

Lo anterior explica la persistencia de tantos desencuentros semánticos cuando el discurso de la agricultura ecológica se pronuncia simultáneamente en el seno de las instituciones públicas y en el de las organizaciones sociales. Entre las instituciones gubernamentales existe la tendencia a reducir el concepto de producción ecológica a la simple sustitución de unos insumos por otros químicos inocuos que perfectamente podrían ser producidos por el mismo fabricante; la cuestión se zanjaría con una simple operación conmutativa.

Pareciera que cuanto más se populariza el lenguaje ecologista, más se olvidara que para ser ecológica la agricultura debe ser —al tiempo— económicamente viable, ambientalmente sana y socialmente justa. Pero la política pública solo la reconoce en su potencialidad como negocio “verde” de alcance in-

«La soberanía de los indígenas sobre sus resguardos y de las comunidades negras sobre sus propiedades colectivas, los campesinos creyeron haber logrado también su propia conquista al consagrarse que la “producción de alimentos tendría una especial protección del Estado”.

ternacional y no como un aporte fundamental en la construcción de modelos solidarios de relacionamiento entre lo urbano y lo rural. Estas interacciones son esenciales para los campesinos y también deberían serlo para las entidades interesadas en educar personas para el consumo responsable.

En el fondo subyace una divergencia radical en la concepción teleológica de lo que presuntamente sería el mismo concepto: mientras las instituciones estatales apoyan las iniciativas de mercados verdes como un objetivo en sí mismo, las ini-

ciativas sociales las promueven como un medio *para* trascender hacia algo otro, más digno que las veleidades del capital. ♦

Sobre el Autor:

* *Comunicador social Corporación Guardabosques.*
email: cgbosques@yahoo.es

